



**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN
TERCERA**

Bogotá D.C., veinte (20) de Agosto de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ MEDIO DE CONTROL:	Magda Cristina Castañeda Parra REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN No.:	110013343064-2021-00011-00
DEMANDANTE:	Eligio Castroy otros
DEMANDADO:	Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
ASUNTO	RECHAZA DEMANDA

**REPARACIÓN DIRECTA
RECHAZA DEMANDA**

I.- ANTECEDENTES

Correspondió a este Despacho la demanda de reparación directa instaurada por los señores **ELIGIO CASTRO, YERLY TATIANA CASTRO BARBOSA, HERMINIA BARBOSA SANTIAGO, YURY ESTELA CASTRO BARBOSA, ELIGIO CASTRO BARBOSA, MARITZA CASTRO BARBOSA; CARLOS ARTURO CARRASCAL, CARLOS ALBERTO CARRASCAL GUERRERO; JAIRO ANTONIO CONTRERAS PRIETO; DEIBIS CHONA CONTRERAS, NIDIA VIDES OVALLOS, ESNEIDER CHONA VIDES, ANGÈLICA GIMARA CHONA VIDES, ULÍSES CHONA HERRERA, DIEGO ARMANDO CONDE TIQUE, EDUAR CHONA CONTRERAS, EDRIN CHONA CONTRERAS, ÉBELI CHONA CONDE, MARICELA CHONA CONTRERAS**, en contra de la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL**, con la finalidad que se le declare administrativamente responsable por los hechos consistentes en las ,amenazas de muerte, terrorismo y desplazamiento, ocurridos en jurisdicción del municipio de Pelaya (Cesar) entre los días 14, 15, y 16 de febrero de 1996.

Para resolver se hacen las siguientes:

II.-CONSIDERACIONES

En este caso se demandó por los hechos de desplazamiento forzado amenazas de muerte, terrorismo, ocurridos en jurisdicción del municipio de Pelaya (Cesar) entre los días 14, 15, y 16 de febrero de 1996, según el hecho sexto de la demanda, “(...) cuando, un grupo paramilitar fuertemente armado, al mando del Comandante Paramilitar **JUANCHO PRADA**, alias “**JUANCHO**”, irrumpió en la Hacienda Bella Cruz, y obligó a cada una de las familias allí residentes a que se desplazaran, amenazando a todos de muerte en caso de permanecer en la hacienda y en la región.”

Respecto de la caducidad en acciones de reparación directa, el artículo 164, numeral 2.-, literal i) del C.P.A.C.A. establece lo siguiente:

"Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia" (El despacho resalta)

Ahora bien, frente a la caducidad en los eventos de desplazamiento forzado, en la sentencia SU-254 de 2013 la Corte Constitucional estableció lo siguiente:

"VIGÉSIMO CUARTO.- DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta transcurso de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta".

En aplicación de la sentencia SU-254, el Consejo de Estado, entre otras pronunciamientos, ha preceptuado que:

"Finalmente, conviene precisar que la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos como el de desaparición forzada no es extensiva en sus efectos a acciones como la ejercida en el sub lite, porque la misma tiene por objeto evitar que este tipo de conductas penales queden impunes ante la imposibilidad de establecer en determinado lapso la responsabilidad de los implicados, consecuencia que no es aplicable a la responsabilidad extracontractual, porque la procedencia de la condena patrimonial al Estado no está condicionada a la imposición de una sanción penal, de ahí que proceda incluso en eventos en los que esta no se profiere, bien sea porque no es posible identificar a los responsables o porque estos son absueltos.(...)"¹.

Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado ha entendido que el desplazamiento no es una condición limitante para el ejercicio de derechos, en donde no se pueda aplicar el término de caducidad, pues su situación especial no impide que en oportunidad, puedan acudir ante la jurisdicción, otorgando poder para tales fines²

En este orden de ideas, en casos de desplazamiento forzado, procede aplicar los términos de caducidad, a partir de la ejecutoria de la sentencia SU 254 del 24 de abril de 2013. Dicha sentencia fue notificada el 19 de mayo de 2013 y, por ende, quedó en firme el 22 de ese mismo mes y año, es decir,

¹ Consejo de Estado, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, 26 de mayo de 2016, rad. 47001-23-33-000-2015- 00231-01

² Consejo de Estado, providencia del 19 de julio de 2017, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 25000233600020160129401, 58480.

para los casos que aún no cursaban ante lo Contencioso, se disponía de un término para incoar la respectiva acción, hasta el 23 de mayo de 2015.

En resumen, mediante la sentencia SU-254 de 2013, la Corte salvó los términos de caducidad en eventos de desplazamiento ocurridos con anterioridad a la ejecución de esa decisión, por lo que en los eventos de desplazamiento posteriores a la ejecutoria de esa decisión, el término de caducidad debía contabilizarse desde el hecho, como lo establece el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA.

Ahora bien, en reciente pronunciamiento del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SALA PLENA, dictada el 29 de enero de 2020, dentro del radicación No. 85001-33-33- 002-2014-00144-01 (61.033) con ponencia de la doctora MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, se unificó la postura que sobre la caducidad del medio de control de reparación directa y se establecieron las siguientes reglas:

“En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra.

Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley (negrilla del despacho).

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia”.

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que los demandantes pretenden el pago de perjuicios por el desconocimiento de la parte demandada de la obligación contenida en el artículo 2º de la Constitución Política de 1991, respecto de la posición de garante frente a los derechos jurídicamente tutelados; en otras palabras, al existir incumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad, por omisión al permitir que grupos

al margen de la ley, causaran graves violaciones sobre los derechos de los demandantes.

En este sentido los demandantes enmarcan los hechos de desplazamiento entre los días **14, 15, y 16 de febrero de 1996** (hecho sexto de la demanda). Ahora, revisado el escrito de demanda no se advierte que la parte actora informara las razones que impidieron a los actores demandar en tiempo ante la jurisdicción contencioso administrativo en busca de la reparación del perjuicio que afirman, les fue irrogado por el aludido desplazamiento, que según la demanda, se ocasionó por el actuar omisivo del Estado al permitir el actuar de los grupos al margen de la Ley en municipio de Pelaya (Cesar).

En ese orden de ideas, el término de la caducidad deberá contarse a partir del **17 de febrero de 1996**, venciendo los dos (2) años el **17 de febrero de 1998**, plazo límite que tenía la parte actora para formular la demanda y solicitar la conciliación extrajudicial en derecho.

No obstante que la celebración de audiencia de conciliación prejudicial suspende el término de caducidad desde su presentación hasta que se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las constancias respectivas, o hasta que transcurran tres (3) meses, lo que ocurra primero:³ Lo cierto es que en el presente asunto, dicha solicitud no logró suspender el término, por cuanto se radicó el **24 de febrero de 2020**, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad (CD obrante a folio 1).

Si la demanda se presentó el **26 de enero de 2021**, (fl. 3), se advierte que aquella se incoó por fuera del término legal para hacerlo.

Por lo anterior, se declarará que en el presente caso, operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Por lo tanto, se rechazará la demanda de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 169 de la Ley 1437.

En consecuencia, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: Rechazar por caducidad la demanda de reparación directa presentada por los señores **ELIGIO CASTRO, YERLY TATIANA CASTRO BARBOSA, HERMINIA BARBOSA SANTIAGO, YURY ESTELA CASTRO BARBOSA, ELIGIO CASTRO BARBOSA, MARITZA CASTRO BARBOSA; CARLOS ARTURO CARRASCAL, CARLOS ALBERTO CARRASCAL GUERRERO; JAIRO ANTONIO CONTRERAS PRIETO; DEIBIS CHONA CONTRERAS, NIDIA VIDES OVALLOS, ESNEIDER CHONA VIDES, ANGÉLICA GIMARA CHONA VIDES, ULÍSES CHONA HERRERA, DIEGO ARMANDO CONDE TIQUE, EDUAR CHONA CONTRERAS, EDRIN**

³ Artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

CHONA CONTRERAS, ÉBELI CHONA CONDE, MARICELA CHONA CONTRERAS,
en contra de la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL.**

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión por correo electrónico de la apoderada judicial de la parte demandante, en atención a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 806 de 2020.

TERCERO: Por Secretaría déjense las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
JUEZ